

## Sus señorías

## El Gobierno se juega su crédito en la nueva ley de trabajo

## ■ Federico Castaño

La mayoría absoluta del PP impone sus reglas y está obligando a los nacionalistas catalanes y vascos a mendigar por los ministerios capitalinos con una actitud mucho más humilde de la que lucieron en la época de Zapatero. Elena Salgado les abrió la puerta de todos los departamentos económicos, donde Josep Antoni Durán i Lleida y Josu Erkoreka se paseaban como Pedro por su casa y conocían, incluso, a la mayoría de los cuadros intermedios del Gobierno. Las circunstancias han cambiado y ahora las entrevistas a las que se avienen Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, José Manuel Soria o Ana Pastor son mucho más selectivas y menos comprometidas: ya nada es lo que era para CiU y para el PNV, ni tampoco para los consejeros de la Generalitat que viajan a Madrid para pedir árnica. Durán y Lleida y el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, han mantenido ya encuentros protocolarios con la mayoría de los ministros. En el caso del PNV, de momento estos encuentros se han limitado al titular de Industria, al que los nacionalistas vascos le han ido a llorar por los 50 millones de euros en subvenciones al I+D+i que se han quedado en el alero con el cambio de Gobierno. Son compromisos presupuestarios cerrados en la

anterior legislatura con el Gabinete socialista que ahora no han sido respetados debido al acuerdo de no disponibilidad por importe cercano a los 9.000 millones con el que se ha estrenado el nuevo Consejo de Ministros. Los nacionalistas vascos ya no están en condiciones de cambiar cromos con el PP porque no necesita de sus votos. En la misma tesitura están los catalanes, a pesar de que Mariano Rajoy ha transigido

**“Los nacionalistas catalanes y vascos mendigan por los ministerios capitalinos con una actitud mucho más humilde de la que lucieron en la época de Zapatero”**

con la entrevista que le ha pedido Artur Mas para oficializar gráficamente su luna de miel. En el Gobierno no hay ningún interés, más bien al contrario, para que esta buena química con Cataluña atraviese las barreras mediáticas de Andalucía, territorio en el que Javier Arenas parece tener asegurado su sillón presidencial el próximo 25 de marzo. En el sur todo lo que huele o suena a privilegio catalán puede ser rechazado a golpe de urna.

La conquista de Andalucía es importante para el PP por muchos motivos, entre otros porque le daría opción al nuevo Gobierno de aplicar en una comunidad clave una reforma laboral que se antoja muy dura, rompiendo de esta forma con unas complicidades tejidas durante casi tres décadas que han costado mucho dinero al erario público. Porque todo el mundo tiene claro que los recortes después de las andaluzas se cebarán, sobre todo, con el sector público y si en algo se ha distinguido Andalucía en los últimos años es en la creación de numerosas empresas y entidades enchufadas a los grifos oficiales que tienen ya, afortunadamente, una vida muy corta. El mismo criterio sería aplicable a la comunidad valenciana, donde al PP le espera también una densa tarea de saneamiento. A partir de la semana que viene, es de esperar que ya veamos pocos consejos de ministros estudiando informes, como ha ocurrido en los dos anteriores. El Gobierno ya está en condiciones de bombear hacia el Congreso la ley de Estabilidad Presupuestaria, la reforma laboral y el nuevo marco en el que se desenvolverá el sistema financiero, tres grandes áreas que tienen en común el interés de Mariano Rajoy en transmitir a los mercados el mensaje de que España está haciendo bien sus deberes y necesita un respiro.

En los medios financieros y empresariales se tiene la percepción, confirmada también en círculos gubernamentales, de que el nuevo Gabinete está entregado a los dictados de Alemania ya que al margen de Ángela Merkel no hay vida posible. Bien lo supo en su día Zapatero y bien que lo acaba de aprender también Nicolás Sarkozy, quien acaba de iniciar un camino tortuoso hacia las presidenciales de primavera en el que corre el

**“En el PP se opina que lo realmente duro, lo que originaría un declive en el respaldo popular, sería una reforma laboral que no contribuyera a crear empleo al final de la legislatura”**

riesgo de ser duramente vapuleado por los mercados. Si España se aplica en su tarea, los alemanes podrán seguir ofreciéndole oxígeno a través del BCE y Rajoy terminará presumiendo de que ha liderado la salida de la crisis con un efecto arrastre de los países periféricos. Es la jugada perfecta en la que se encuentra metido el nuevo Gobierno. Pero lo que no se termina de ver por ningún sitio es el crecimiento económico, ya que hay muy poco margen para los estímulos.

Y sin crecimiento no se creará empleo, una de las promesas que va a terminar comprometiéndose, a favor o en contra, el futuro del PP en el poder. Así estamos metidos de hoz y coze en esta difícil encrucijada.

Si dentro de dos meses Arenas accede a la presidencia andaluza, a Mariano Rajoy y a su equipo económico no les quedará ya ninguna excusa política para no aplicar con eficacia su política económica. Es verdad que en poco tiempo el nuevo Gabinete ha demostrado frescura en la toma de decisiones. Ha decidido un primer ajuste de 15.000 millones entre ingresos y gastos con una erosión social que todavía está por determinar, ha roto la inercia inmovilista del PSOE para decidir la futura ubicación del almacén nuclear y tiene en capilla una reforma laboral en la que se juega su credibilidad. En el PP se opina que lo realmente duro, lo que originaría un declive en el respaldo popular, sería una reforma que no contribuyera a crear empleo al final de la legislatura. La sociedad parece entregada y este dato se ve como una oportunidad para afrontar cambios profundos y sin barreras artificiales. De ahí que si la reforma del mercado de trabajo fracasa por blanda, los efectos sí que serán severos para el Gobierno y también para el país. Es obvio que Rajoy se la juega en este envite que supervisa desde Trabajo la ministra Fátima Báñez.

## Crónica económica

## Reforma laboral: el día de la marmota

## ■ Ana Sánchez Arjona

Hay una estupenda película de 1993, *El Día de la Marmota*, traducida en España como *Atrapado en el tiempo* en la que su protagonista se da cuenta que revive el mismo día continuamente. Tras repetirse varias veces esta situación, comienza a pensar que no tiene sentido vivir día tras día lo mismo, por lo que decide cambiar los acontecimientos.

Pues bien, parece que nosotros estamos asistiendo a algo parecido con las negociaciones de la reforma laboral, pero con una diferencia sustancial, que los interlocutores sociales, —CEOE, UGT y CCOO—, son prácticamente incapaces de variar los hechos, al menos, los verdaderamente trascendentales.

Como en la película, la repetición de las mismas pautas de la negociación tiene algunas variaciones ya que después de años se alcanza un acuerdo para cambiar tres días festivos de lugar en el calendario. Yo soy de la opinión de que en el largometraje hasta la repetición del día de la marmota es bastante más prometedora.

Pero si por el contrario se aburre el público, como estos negociadores aburren a los ciudadanos españoles, se pueden ir de la sala de

proyección tan ricamente. Esto, con nosotros los españoles, siempre es más difícil pero, si empresarios y sindicatos se empeñan, puede ser que cuando terminen las reuniones ya no haya mercado laboral que cambiar porque nos habremos ido todos a trabajar a otro lado.

Y es que esta suposición va tomando forma porque España ha dejado de ser un país de acogida. Así de contundente es la principal conclusión que se

**“Ignacio Fernández Toxo viene insistiendo desde hace tiempo en que una reforma laboral a destiempo puede agravar la situación económica y “quemar medidas para generar empleo”**

extrae de los datos de las Estimaciones de la Población Actual publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Concretamente, a lo largo de todo el pasado año 2011 han sido 62.611 los españoles que han emigrado fuera de las fronteras del país. Si a este dato le sumamos los 445.130 extranjeros que vivían en España y que, o bien han vuelto a su país, o bien han cambiado su estancia aquí por la de otro país, finalmente nos

encontramos que son 507.740 las personas que han salido de España el pasado año.

Y no deben de sorprender estas cifras porque ya ni siquiera se crean expectativas sobre la posibilidad de que, un buen acuerdo, pueda cambiar el rumbo de las cifras del desempleo, algo que incluso alguno de los interlocutores ha descartado de antemano.

Por ejemplo, Ignacio Fernández Toxo viene insistiendo desde hace tiempo en que una reforma laboral a destiempo puede agravar la situación económica y “quemar medidas que sirvan para generar empleo” para alertar, además, de que no es lo más perentorio porque lo que necesita la economía es una “urgentísima” reforma del sistema financiero, ya que mientras no llegue el crédito a las familias no se generarán puestos de trabajo.

Independientemente de que, finalmente legisle el Gobierno, sindicatos y patronal hablan y hablan sobre la urgentísima e imprescindible reforma solicitando prórroga tras prórroga para ver si llegan a algún acuerdo mientras que el paro no deja de crecer. De vez en cuando, el Ejecutivo de turno no tiene más remedio que hacer algo, siempre insuficiente y timorato a juicio de los mercados que nos infringen un duro castigo bajo la dictadura de los rating.

La reforma laboral se aprobará dentro de dos semanas “con acuerdo o sin él” entre patronal y sindicatos. ¿Son palabras de Mariano Rajoy en enero de este año? No, son del expresidente Rodríguez Zapatero cuando pretendía enviar un mensaje de “confianza y calma” sobre la economía española en la primavera de 2010.

Es más, y volviendo sobre los interlocutores sociales, parece que la reforma, todavía en el

**“El último viernes de este mes se conocerá la EPA del cierre del año que pondrá encima de la mesa, tal y como ha anunciado el presidente Rajoy, 5,4 millones de parados”**

aire, está abriendo focos de conflicto en el seno de la CEOE.

La manera en que el presidente Joan Rosell ha llevado las riendas de la negociación con UGT y CCOO no convence a una parte de los empresarios que le echa en cara su flexibilidad en el diálogo y el hecho de que se hablara sobre determinados asuntos de gran peso laboral sin informar antes a los órganos de gobierno de la patronal.

Hace una semana al parecer, el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, se carteo con Rosell y en el escrito afirmaba que hubiera sido mejor no haber cerrado compromisos que poco suman y mucho complican el papel de la Confederación en el futuro para echar en falta que con antelación a hacerlos públicos hubiera tenido lugar algún encuentro de órganos de gobierno o de vicepresidentes para, de este modo, poner sobre la mesa las distintas opiniones sobre asuntos tan importantes y decisivos.

Y mientras se siguen manteniendo las reuniones, Mariano Rajoy ha vuelto a bajar una nueva fecha para presentarla.

El presidente ha anunciado que se aprobará entre el Consejo de Ministros del día 27 de enero y los dos primeros de febrero. Sin embargo, el último viernes de este mes se conocerá la Encuesta de Población Activa, la EPA del cierre del año que pondrá encima de la mesa, casi con toda seguridad, tal y como también ha anunciado el presidente, que España terminó 2011 con 5,4 millones de parados.

El nuevo Gobierno del PP podría elegir esa fecha para que la opinión pública reciba la noticia como una respuesta rápida del Gabinete Rajoy al problema del desempleo.